Honorable Magistrado

JUAN MANUEL DUMEZ ARIAS

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca – Sala Civil Familia

E. S. D.

Radicado: N° 25307-31-03-001-2017-00048-01

Clase: REIVINDICATORIO

Demandante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Demandado: RUBIEL MORALES - OTROS

Ref: Sustentación recurso de apelación

Diana Lucia Aldana Giraldo, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 1.031.139.507 de Bogotá y tarjeta profesional 273.698 del C.S. de la J. actuando como apoderada de la parte demanda en el proceso reivindicatorio de referencia, y de conformidad con el artículo 14 del decreto ley 806 de 2020 y el 322 del código general del proceso, y estando en término me permito SUSTENTAR el RECURSO DE APELACIÓN presentado en contra del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Primero civil del circuito de Girardot de fecha 10 de mayo de 2021, de acuerdo con las siguientes:

RAZONES DE INCONFORMIDAD

De acuerdo a una lectora del fallo de primera instancia se encuentran serios reparos al análisis dado al material probatorio allegado al expediente y a las pruebas practicadas, por lo que se procede a señalar los siguientes defectos de la sentencia:

1. No se refiere a todo el material probatorio y argumentos esgrimidos al interior del proceso

Con la contestación de la demanda se allegaron numerosos documentos de suma importancia para el análisis del caso que aquí se estudió, como la escritura 193 del 20 de marzo de 1937, el convenio de 25 de marzo de 1946, la escritura 1358 de 1954 y la escritura 5927 del 13 de octubre de 1969 (que protocoliza el convenio 108 de 1968) en donde se evidencia la existencia de población campesina ancestral en los predios, los compromisos adquiridos por el Ministerio de Defensa de entregar varios globos de terreno y transferir la propiedad de estos al INCORA para adjudicarlos a familias campesinas de esas veredas que habitaban estas tierras con el objetivo de dejar saneados los terrenos de la nación y el compromiso del INCORA de ubicar a colonos, arrendatarios, invasores y ocupantes diseminados en los predios; sin embargo en el fallo no se analizan estos documentos ni los derechos o expectativas que estos crearon en la población campesina, máxime cuando los mismos estaban suscritos no por particulares sino por entidades e instituciones que además tenían obligaciones legales con la población campesina.

Dichos documentos, que no fueron objeto de análisis en la sentencia, dan fe de que en los predios que se busca reivindicar existía población campesina, vulnerable, que ha poseído estos predios, actuando como señores y dueños, produciendo y explotando la tierra desde

mucho antes que el predio se convirtiera en bien fiscal y pasara a manos del Ministerio de Defensa; esto se evidencia también en que los demandantes no han podido demostrar en ningún momento la existencia de una invasión por parte de la población campesina a territorios que hayan estado en custodia del Estado, sino que por el contrario, los territorios han estado habitados ancestral e históricamente por la población campesina y estando allí es que, por actuaciones administrativas, se ha intentado convertir el predio en un bien fiscal, sin tomar en cuenta los derechos y/o expectativas de las familias que allí han permanecido.

Tampoco fueron analizados los documentos de escritura pública No. 1066 y 1065 de 6 de octubre de 2011 por medio de las cuales se protocolizaron mejoras de los señores Rubiel Morales y Milton Morales así como las declaraciones de los señores Hernando Pedreros y Martín Carvajal quienes narran conocer la posesión que ambos demandados tienen desde hacía más de 70 años por sumatoria de posesiones.

Tampoco se realizó ninguna manifestación o análisis respecto del documento de copia de licencia de construcción del día 22 de agosto de 1997 con la cual fue autorizada la construcción de la casa del señor Milton Morales, y de la cual se desprende existencia de planos y de autorización por parte de una entidad territorial para realizar las construcciones en el lugar, reforzando la idea de propiedad del señor Milton respecto del predio.

Por otra parte, tampoco fueron objeto de análisis las declaraciones de parte y las pruebas testimoniales practicadas, en las que por ejemplo el señor Reinaldo Pedreros y el demandado Rubiel Morales coincidieron al expresar que el primero le vendió al segundo en el año 1983 y que para ese momento el predio ya tenía una cadena de posesiones pues antes de esta venta, el predio había sido comprado al señor Gustavo Pedreros (hermano de Reinaldo Pedreros). Igualmente los testimonios rendidos por las señoras María Inés Rodríguez y María Etelvina Hernández Galindo, quienes son también nativas de la región y refirieron conocer tanto la venta y propiedad como la pertenencia del señor Rubiel y sus hijos (Milton Morales y Maryoli Morales) quienes tenían posesión de predios que inicialmente hacían parte del predio del señor Rubiel Morales.

Respecto del señor Yairciño Morales, tanto su declaración de parte como el testimonio del señor José Hernando Torres coincidieron respecto a la venta que éste último realizó al demandado Yairciño Morales en el año 2000 respecto de un predio que le pertenecía como herencia que le había dejado su padre Eusebio Torres, nativo de la región.

Ninguna de estas declaraciones fueron objeto de estudio por parte del fallo pese a que se recalcó sobre ellas en los alegatos finales, y de ellas puede corroborarse lo narrado tanto en la contestación de la demanda como en los documentos allegados, y es que en la región ha existido comunidad campesina ancestralmente la cual ha venido explotando, ocupando y poseyendo los predios desde antes de que el bien se convirtiera en bien fiscal **y desde antes de que entrara en vigencia del decreto 1400 de 1970 que expide el código de procedimiento civil y con el cual se introdujo la prohibición de que fuera posible prescribir bienes fiscales.**

Las anteriores omisiones por parte del Juez implican una errónea valoración del material probatorio allegado y practicado, al cual no se le dio la importancia que tenía y de plano no se pronunció respecto a estos medios probatorios en la sentencia, concluyendo erróneamente

que es procedente la reivindicación del predio en litigio, pese a que la evidencia indica que ya se encontraba prescrito para el momento en el que los bienes fiscales se convirtieron en bienes imprescriptibles.

2. Contradicción entre los argumentos para declarar la reivindicación y el reconocimiento de la buena fe como poseedores conforme a las fechas de los documentos y testimonios.

En el fallo de la sentencia se reconoce a los demandados como poseedores de buena fe, reconociendo que han obrado como señores y dueños de sus predios conforme a sus propias expresiones y a los documentos allegados. Esto es, se reconoce que conforme a sus narraciones y documentos es creíble que han fungido como poseedores desde antes que el Ministerio de Defensa Nacional adquiriera el predio, máxime por las obligaciones plasmadas en los documentos que les generaron expectativas de adjudicaciones o parcelaciones; sin embargo, al mismo tiempo se expone que no era posible adquirir por prescripción el predio que durante tantos años han explotado por tratarse de un bien fiscal.

Esta argumentación se realiza sin consideración a lo señalado en el decreto 1400 de 1970 por medio del cual se expidió el código de procedimiento civil que introdujo la prohibición de que fuera posible prescribir bienes fiscales, decreto que entró en vigencia el 1 de julio de 1971. El análisis de esta normatividad nos indica que hasta antes del 1 de julio de 1971 era procedente la prescripción sobre bienes de tipo fiscal, y es precisamente esto lo que ocurrió en el caso que nos ocupa, pues no es dable acceder a las pretensiones de reivindicación que el Ministerio solicita basándose en que se trata de un bien fiscal que no es posible prescribir, puesto que este derecho se consolidó por la posesión que del bien venían haciendo los campesinos desde antes de la entrada en vigencia de la mencionada norma. En otras palabras, el bien fue prescrito desde antes del 1 de julio de 1971 por la posesión que sobre ellos han venido haciendo los campesinos, posesiones que fueron compradas y heredadas respectivamente a los aquí demandados y que en el propio fallo es reconocida, pues se establece que es de buena fe que los demandados han creído y actuado como dueños.

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala civil de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterada al establecer:

“Esta Corporación en el fallo de 6 de octubre de 2009, exp. 2003-00205-02, indicó sobre este punto que “existen eventos en los cuales es posible, no obstante la explícita prohibición legal, adquirir por prescripción el dominio de los bienes fiscales de una entidad de derecho público por cuanto en tales situaciones se predica la existencia y configuración de un derecho legítimamente adquirido, lo que ocurre cuando: a.-) La posesión del reclamante se inició y consumó antes del 1° de julio de 1971, fecha en la cual entró a regir el artículo 413 (hoy 407), numeral 4°, del Código de Procedimiento Civil. b.-) El señorío del promotor de la pertenencia se consuma durante la vigencia del precepto citado, pero antes de la fecha en que la entidad de derecho público se convierte en propietaria del bien. En ambos casos se protege el “derecho adquirido” por el particular, según lo proclamado por el artículo 58 de la Constitución Política, que en ejercicio y amparo de las facultades que le daba el sistema legal imperante le permitió poseer un bien con vocación de adquirir su dominio por el transcurso del

tiempo y con el lleno de los restantes requisitos previstos por el legislador. Negarle el reconocimiento de esta prerrogativa prevista en el ordenamiento jurídico nacional implicaría un atentado contra la buena fe y la confianza legítima de estar actuando dentro del marco de lo permitido y autorizado”.¹

Esta jurisprudencia fue reiterada mas adelante en los siguientes términos

“No obstante, hay situaciones en que no es viable aplicar la restricción de la usucapión respecto de los bienes fiscales, por cuanto ello entrañaría desconocer un derecho legítimamente adquirido, a saber:

a) Si la posesión apta para prescribir se inició y consumó antes de entrar en vigor el numeral 4º del artículo 413, hoy 407, del CPC, esto es, el 1º de julio de 1971.

Esta excepción se justifica porque, en principio, la ley no puede afectar una situación jurídica concreta y consolidada, que ha permitido el ingreso de un derecho al patrimonio de una persona, por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para su nacimiento.

El pasar por alto esa circunstancia comporta ignorar situaciones consolidadas, que ampara la Carta Política en su artículo 58, según el cual “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

b) Si el cumplimiento del requisito temporal para usucapir se cumplió dentro de la vigencia del citado numeral 4º del artículo 41, después 407 (hoy CGP, num. 4º, art. 375) pero con anterioridad al día en que la entidad de derecho público adquirió la propiedad de la cosa.

Esta segunda excepción busca respetar los principios de la buena fe y la confianza legítima, pues, para que una situación jurídica o material abordada de cierta forma en el pasado, genere razonables expectativas, debe existir una causa constitucionalmente aceptable que autorice su variación.”² (subrayas fuera del texto)

En conclusión, el análisis de la declaratoria de poseedores de buena fe de los demandados en los años y términos que se establecen en el fallo, a la luz del hecho jurídico de que antes del 1 de julio de 1971 los bienes fiscales eran susceptibles de prescripción adquisitiva **debe llevar a una declaración de que antes de esa fecha los bienes solicitados en reivindicación ya habían sido adquiridos por los demandados por el paso del tiempo.**

Por otra parte, no se aborda en el desarrollo de la sentencia el precedente judicial allegado respecto a sentencia del Juzgado segundo civil del Circuito de Melgar – Tolima (27 de agosto del 2002) en la que se estudió un caso de similares características, en la que se establece:

“No se explica el despacho como el Ministerio de Defensa, a través de sus agentes, desde el año de 1954 en que adquirió la titularidad de dicho predio, no haya

---

¹ Exp. 0504531030012007-00074-01 diez (10) de septiembre de dos mil trece (2013) M.P. FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ Bogotá DC

² SC3934-2020. Radicación: 05440-31-13-001-2012-00365-01 diecinueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020). M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Bogotá, D. C.

reivindicado el dominio y la posesión a favor del Estado, hasta ahora casi 49 años después, cuando se presenta la Litis- es decir nunca han desvirtuado a Ángel Vásquez y ahora a los demandantes, la presunción de que trata el artículo 762 -2 del C.C. es decir que estos se han reputado como dueños a través de su posesión. (...) así las cosas la posesión ha sido ejercida en forma continua e interrumpida sin que nadie haya pretendido despojar al primero a Ángel Vásquez y posteriormente a Arcedio Antonio Toro y Myriam Leocadia Silva por un periodo de más de 50 años, pues esta viene desde antes del año 1950, según lo analizado en los testimonios de los descendientes de los antiguos propietarios”.

En el mismo caso, respecto del presupuesto de que el bien fuera susceptible de adquirirse por prescripción se manifestó el despacho así:

En nuestro caso, el predio “california” es de los que se denomina “Fiscales” pues aunque pertenece su titularidad a la Nación, no es de uso público(.....).

De manera que antes de entrar en vigencia del Decreto 1400 de 1970 comúnmente llamado Código de Procedimiento Civil, la declaración de pertenencia procedía respecto de bienes de propiedad de las entidades de derecho público, llamados bienes fiscales, siempre y cuando se dieran las exigencias de la ley.

Como se analizó anteriormente, el señor Ángel Vásquez, antes del año 1950, ya detentaba en compañía de su padre quien falleció en 1961, la posesión del predio denominado “California”, es decir que el derecho de usucapión por prescripción ya se encontraba consumado para el 1° de julio de 1971 Fecha en que entró en vigencia el nuevo C.P.C. pues habían transcurrido más de veinte años y ningún titular del bien, particulares hasta 1953 y el estado después de esa fecha, Ministerio de guerra primero y Ministerio de Defensa – La Nación después, INCORA y nuevamente Mindefensa, ejercieron actividad judicial o administrativa para reivindicar lo que era de su titularidad.

Teniendo en cuenta que la parte actora acude a la suma de de posesiones (.....) el artículo 2521 del C.C. dice que si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o mas personas, el tiempo del antecesor puede agregarse al tiempo del sucesor” . (subrayas fuera del texto)

Por su parte, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Sala civil se expresó en los siguientes términos al resolver consulta:

En el caso sub-lite, el predio reclamado por los demandantes por uno de los modos de adquirir el dominio – la prescripción- así sea de propiedad de una entidad de derecho público como Mindefensa, es un bien prescriptible, porque el derecho, tal como lo señaló el A-quo se adquirió bajo el imperio de la ley anterior a la vigencia del decreto 1400 de 1970 (...) significando entonces que el señor Velásquez al 1 de Julio de 1971 cuando entró en vigencia el C.P.C. que prohibía la prescripción de los bienes de entidades de derecho público, tenía mas de 20 años de posesión, operando en su favor el fenómeno de la prescripción por haber consolidado su derecho antes de la vigencia de dicha ley....

De acuerdo con lo establecido en esta jurisprudencia y atendiendo a criterios de igualdad y equidad ante la ley, es claro que se trata de un caso de iguales características, incluso en

cuanto a la entidad involucrada que no ejerció ni desvirtuó la posesión que población campesina hizo de los bienes, debe declararse que no es posible reivindicar el predio objeto de este litigio por cuanto antes de la entrada en vigencia de decreto 1400 de 1970, la cual fue el 1 de julio de 1971, ya se había prescrito el bien inmueble, de manera que la población campesina ha adquirido un derecho, que con la figura de la suma de posesiones establece que los actuales poseedores son en realidad los dueños del predio.

3. Error en cuanto a valoración de la excepción propuesta

Se señala dentro del fallo que desde la parte demandada se propuso la excepción de *prescripción de la acción judicial reivindicatoria*, sin embargo, cuando se procede a estudiar la mencionada excepción, se termina analizando el fenómeno de la *prescripción adquisitiva de dominio*.

Como puede evidenciarse, se trata de dos fenómenos diferentes que merecen un estudio a profundidad en el presente caso, pues una es la institución que permite adquirir un bien por el paso del tiempo y otro es el fenómeno que extingue la posibilidad de interponer una acción por no haber hecho uso de esta en un periodo determinado de tiempo.

Así, el código civil colombiano contempla en el artículo 2518 la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA en los siguientes términos:

*Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales.
Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados.*

Por su parte el artículo 2535 establece la PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA en los siguientes términos:

*La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.
Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.*

Mas adelante establece que la acción ordinaria prescribe en el término de diez años (10).

Para el caso concreto, la acción reivindicatoria es una acción ordinaria, pues busca se declare que los predios solicitados en reivindicación pertenecen a la Nación, al igual que corresponde a ellos su dominio pleno y por tanto se condene a restituir un bien. De allí, que a esta acción debe aplicársele el fenómeno de la prescripción extintiva por el paso de más de 28 años desde que los predios que hoy conforman el predio de mayor extensión fueron englobados por medio de la escritura No. 2144 del 08 de noviembre de 1990 en cabeza del Ministerio de Defensa.

Lo anterior suscita un error en la interpretación del juzgador respecto de la excepción propuesta pues se estudió fue la posibilidad de que los aquí demandados pudieran adquirir por prescripción los predios que han explotado ancestralmente, en vez de estudiar el

fenómeno que extingue la posibilidad de presentar la acción judicial por el paso del tiempo sin que esta se hubiere presentado.

Una postura que permita que la acción reivindicatoria se aplique después del término de extinción consagrado en el código, equivaldría a decir que la acción reivindicatoria es eterna y puede ejercerse en todo momento sin distingo del tiempo que la ley establece para que pueda presentarse; además, dejaría el mensaje de que sobre los bienes fiscales, es decir bienes en cabeza de entidades a quienes debe exigírseles la máxima responsabilidad sobre la custodia de los bienes que detentan, puede caerse en el descuido de permitir que otros ejerzan actos de señor y dueño sobre sus predios de manera indefinida y en todo caso podrán reclamar sobre ellos su titularidad.

4. No se encuentra sustento a la decisión respecto a reducir la valoración realizada de las mejoras por parte de la perito.

Si bien la postura de mis poderdantes ha sido la constante oposición a una declaratoria de la reivindicación y a una condena que les imponga restituir los bienes que por décadas han explotado, ocupado y poseído, ello no desconoce, como bien lo señala el juez en su fallo, la necesidad de establecer en el caso de la reivindicación el pago de las restituciones mutuas entre demandante y demandado. Teniendo en cuenta ello, el despacho solicitó a una auxiliar de la justicia la tasación de diferentes conceptos entre los que se encuentran mejoras útiles y necesarias, expensas necesarias en la conservación del bien, entre otras.

Sobre estos conceptos la profesional designada rindió un primer informe pericial frente, al cual, esta parte procesal presentó varios reparos en el momento de contradicción del informe, por lo que se ordenó la adición y corrección de diferentes conceptos presentados en el informe inicial.

En este segundo informe se evidencio un trabajo mas riguroso y detallado respecto a la tasación de las mejoras de los aquí demandados, sin embargo, y sin mayor explicación o fundamentación de índole jurídico o material, en el fallo se desconocen y reducen las mejoras tasadas por la profesional.

Así, respecto del señor Yairciño Morales se presentan las siguientes inconformidades:

- a.** No se reconocieron los valores del baño (pese a que fue el mismo Juez quien ordenó su cuantificación atendiendo a que no podían desprenderse del inmueble sin importar si los materiales y mano de obra habían sido proporcionados por la alcaldía de Nilo)
- b.** No se reconoció el valor total con el que fue cuantificado el cultivo de mandarina presente en el predio aduciendo a que desde el año 2020 el cultivo se encuentra sin conservación o mantenimiento y a la *“inexplicable variación del valor de los árboles por parte de la auxiliar de la justicia del dictamen”*.

Este argumento sorprende pues la ampliación del dictamen contiene **15 páginas** detalladas que explican los valores de fertilización, control de plagas, enfermedades y arvenses, equipos maquinaria e insumos, mano de obra y servicios necesarios para

el mantenimiento del cultivo y que precisamente explican el valor del cultivo, elementos que no fueron detallados en el informe inicial.

Esto además desconoce lo establecido en el código civil respecto del abono de mejoras útiles en el artículo 966 que establece:

El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda.

Solo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal de la cosa.

El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan, al tiempo de la restitución, las obras en que consisten las mejoras, o el pago de lo que en virtud de dichas mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo.

En cuanto a las obras hechas después de contestada la demanda, el poseedor de buena fe tendrá solamente los derechos que por el inciso último de este artículo se conceden al poseedor de mala fe.

El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles de que habla este artículo.

Pero podrá llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehuse pagarle el precio que tendrían dichos materiales después de separados.

De lo anterior se puede deducir que no estaba obligado el demandado a continuar con el cuidado del bien después de la contestación de la demanda, pues estas obras o mejoras no se le hubieren reconocido de ninguna manera. No podría entonces interpretarse en contra de los demandantes la actitud de no continuar invirtiendo en la conservación del cultivo, que como puede verse en lo recaudado en el informe pericial es alrededor de 41'000.000 para el año 2020, pues como lo indica la norma, ese tipo de pagos no sería reconocido al interior del proceso judicial.

Es decir, es apenas lógico que si la norma establece que las mejoras realizadas en el predio posterior a la contestación de la demanda no serían valoradas dentro del proceso judicial, los demandados se abstuvieran de realizar mejoras que no serían reconocidas, pero ello no indica que esta determinación deba interpretarse en su contra para no reconocer el valor total de los arboles de mandarina al momento de la contestación de la demanda, que es lo que se evaluó en la primera visita ocular al predio y que al tiempo fue lo examinado por la perito para su informe.

- c. En cuanto al valor presente en el flujo de caja, tampoco se entiende la razón para reconocer este concepto únicamente por un año, pues como ya se indicó, el abandono del cuidado del cultivo se dio precisamente por la existencia de una demanda en su contra, según la cual esos cuidados, que tienen un precio elevado como consta en el informe pericial, no serían reconocidos; sin embargo, de no haberse presentado dicha acción, el demandado habría podido continuar con la producción de mandarina por un término de 12 años más, pues en el informe pericial se estableció un promedio de vida del cultivo de 20 años en total.

Es decir, no puede ser imputable al demandado el deterioro del cultivo, pues el mismo obedeció a la interposición del proceso judicial que nos ocupa y por tanto debe

reconocerse la totalidad del producido que pudo tener de haber podido continuar con la producción y el cuidado normal del cultivo.

- d. De igual forma en cuanto al concepto de valor de producción neta hasta el año 9 tampoco se entiende la razón por la cual no se reconoce este concepto pues es precisamente el valor del cultivo.

Los anteriores errores configuran el denominado defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio o por la defectuosa valoración del material probatorio, el cual sucede cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido.

Así lo ha definido jurisprudencialmente la Corte Constitucional en sentencia T-422 de 1994 donde establece:

“Evidentemente, si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (C.P.C., art.187 y C.P.L., art.61), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a éste desiderátum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales.”³

En el caso concreto se configura este error teniendo en cuenta que pese a existir y cualificarse dentro del proceso un informe pericial que da cuenta de los valores reales, sustentados, de las mejoras realizadas por los demandados, el juez determina arbitrariamente apartarse de estos valores, considerando “inexplicable” el cambio entre el primer y segundo informe pericial, cuando se encuentra respaldado en detalle el valor asignado.

Conforme a los anteriores argumentos solicito respetuosamente:

PRIMERO: se revoque el fallo de primera instancia proferido y en su lugar se nieguen las pretensiones del demandante.

De no acogerse esta solicitud, **subsidiariamente se solicita** la modificación de los valores reconocidos a los demandados a título de mejoras útiles de manera que se incluyan todos los valores reconocidos en el segundo informe pericial presentado por la auxiliar de la justicia, por estar debidamente justificados – mejoras necesarias y mejoras útiles.

---

³ sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.

NOTIFICACIONES

Notificaciones en la carrera 10 No. 15 – 39 Oficina 507 Edificio Unión en Bogotá, teléfono 3134546937 y a los correos:

Email: cjiracastro@cjiracastro.org.co y luciaaldana@cjiracastro.org.co

Atentamente,

Diana L. Aldana G.

DIANA LUCIA ALDANA GIRALDO
C.C. 1.031.139.507 de Bogotá
T.P 273.698 del C.S. de la J.